



CONFEDERACIÓN
DE EMPRESARIOS
DE MÁLAGA

DOSSIER DE PRENSA DIARIO

FECHA:

18/2/2013

El consenso marca la firma hoy del IV Pacto andaluz por el Turismo entre Junta y sindicatos

:: E. P.

SEVILLA. La Junta de Andalucía, los sindicatos CC OO-A y UGT-A y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) firmarán hoy en Málaga el IV Pacto Andaluz por el Turismo, que estará marcado por el «consenso» con todo el sector y por la optimización de recursos y con el que se pretende «recuperar» el mercado nacional y de proximidad, principal emisor de viajeros a la Comunidad, además de incrementar la cuota internacional y reducir la estacionalidad.

El pacto lo suscribirá el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, con el secretario general de CC OO-A, Francisco Carbonero, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, y el presidente de la CEA, Santiago Herrero, y se enmarca en la Concertación Social.

Esta semana pasada, Rafael Rodríguez puso en valor la importancia de un sector que supone «la bolsa que mantiene a flote la Comunidad», generando un volumen de negocio de 16.300 millones en 2012, un 3,45 más que en el ejercicio anterior.

Constructores piden mayor promoción del turismo residencial

EP MÁLAGA

El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, José Prado, defendió ayer que el Patronato de Turismo de la Costa del Sol incluya en su Plan de Acción de 2013 acciones de promoción del turismo residencial, un segmento que ha experimentado un crecimiento en 2012 gracias a la venta de viviendas a ciudadanos extranjeros, muchos de ellos procedentes de Rusia, uno de los mercados emergentes para la provincia.

Así, señaló que el programa Living Costa del Sol, si está dando sus frutos, con un incremento superior al 10% en el número de viviendas adquiridas por extranjeros

Aseguran que el año pasado sólo invirtieron 39.000 euros de los 115.000 previstos

durante el pasado año en comparación con 2011. Por ello, defendió que el Plan de Acción del Patronato para este ejercicio cuente con más presupuesto ya que se plantean 20.000 euros, un 0,72% del total, a pesar de ser un sector que, aseguró, "genera el 55% de todas las pernoctaciones turísticas de la provincia malagueña", además de beneficiar a otros segmentos como la restauración o los alquileres de vehículos.

En la pasada anualidad el presupuesto previsto en este programa fue de 115.000 euros aunque, según Prado, socio fundador del Patronato de Turismo, se gastaron 39.900 euros en siete acciones. En este sentido, demandó más sensibilidad con este sector.

Máster de Viticultura y Enología de la Cámara de Comercio

■ La Cámara de Comercio presentó ayer el I Máster de Viticultura y Enología que durará del 14 de marzo al 5 de julio de 2014, tres días a la semana, con una carga lectiva de 600 horas, cien de ellas de prácticas en bodegas. El objetivo es formar profesionales del más alto nivel ofreciendo teoría y práctica sobre viticultura, enología, legislación y comercialización vitivinícolas a nivel nacional e internacional. El coste del máster es de 3.900 euros. Está abierto el plazo de inscripción.

L. O. MÁLAGA



Hojiblanca, Postres Montero y Maskom se suman al pacto para aprovechar los excedentes de comida



AMANDA SALAZAR

✉ asalaz@diariosur.es

Bancosol sigue buscando aliados entre las empresas de la provincia para evitar que se tiren 1.500 toneladas de alimentos

MÁLAGA. Tres empresas malagueñas han sido las primeras en dar un paso adelante para adherirse al pacto que fomentan los Bancos de Alimentos -entre ellos Bancosol- con la Asociación de Fabricantes y Distribuidores españoles, (AECOC). Hojiblanca, Postres Montero y Maskom se suman a la campaña para reducir los excedentes de comida y, si pese a todo se generan sobrantes, aprovecharlo de la mejor forma posible, donándolos a las familias en crisis o reconvirtiéndolos en productos más duraderos.

Por su parte, Bancosol continúa buscando aliados entre las empresas de la provincia para evitar que se tiren 1.500 toneladas de comida. Mañana martes celebra un encuentro en el Colegio de Médicos con la representante de AECOC, Nuria de Pedraza, para presentar la campaña a los empresarios y a los bancos de alimentos andaluces. Desde la firma Hojiblanca aseguran que este acuerdo no es más que confirmar lo que ya venían haciendo, ya que trabajan con los bancos de alimentos de todas las provincias donde tienen presencia.

Lo mismo señalan desde Postres Montero, que durante su cita

en el Foro Transfiere señaló a SUR que siempre han donado alimentos a los más desfavorecidos. «Una empresa no se puede mantener al margen de la sociedad en la que se encuentra, y en este sentido intentamos apoyar a las familias que pasan más dificultades», señaló

Juan Carlos López, gerente de la compañía que pertenece a Grupo Reina.

Este plan está destinado a todo el sector alimentario: producción, industria de transformación, distribución a través de cadenas de supermercados, restaurantes y ho-

teles. Así lo explicó a SUR Nuria de Pedraza, quien señala que esta propuesta de eficiencia -al que en poco tiempo se han suscrito ya más de un centenar de grandes empresas de toda España- tiene dos funciones. Por un lado, mejorar la eficacia de las empresas, sus

procesos logísticos y comerciales para evitar que produzcan más alimentos que los que realmente se demandan. Por otra parte, continúa De Pedraza, «asumiendo que siempre se van a generar excedentes», mejorar la red para su utilización. «Su primer destino pueden ser los Bancos de Alimentos, pero hay muchas otras posibilidades como emplearlo para generar alimentación para animales, hacer mermeladas y zumos que tienen una caducidad más elevada, o la revalorización de productos como abonos», dice.



Málaga capital se confirma como segundo destino nacional receptor de turismo idiomático

SUR 18 FEB. 2013

•• SUR

MÁLAGA. La capital malagueña se confirma como el primer destino de Andalucía y el segundo de España como receptor de turismo idiomático. De hecho, cada vez son más las personas que visitan la provin-

cia atraídos por el aprendizaje del español; de ahí que desde el Patronato de Turismo se hayan incluido una quince na de acciones en origen especializadas en este segmento.

Más de 400.000 estudiantes han pasado por la ciudad en los últimos

10 años y, según datos del Instituto Cervantes, el español es, después del inglés, la segunda lengua extranjera más estudiada en el ámbito mundial, superando los 14 millones de alumnos en 90 países diferentes.

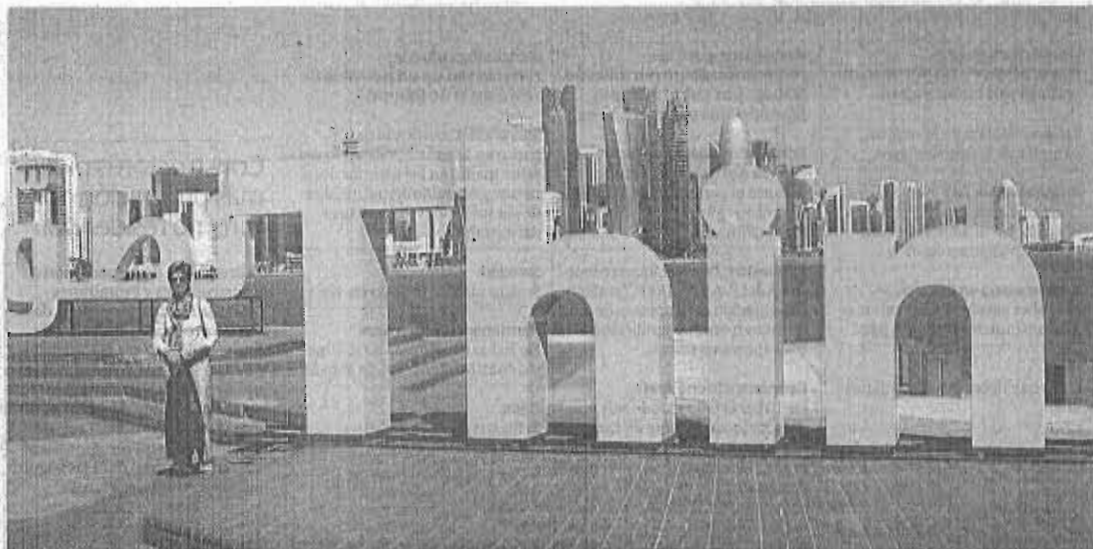
Dada la importancia de este segmento, responsables del Patronato de Turismo de la Costa del Sol y representantes del sector, en concreto de la Asociación de Centros de Español en Málaga (ACEM), se han reunido para analizar el presente y el futuro de este segmento así como para estudiar el posicionamiento de Má-

laga y la marca Costa del Sol en relación con el mismo.

El objetivo, según han informado desde el Patronato, es el de crear sinergias entre la oferta pública y los centros privados para lograr un objetivo común: mejorar la promoción y comercialización de la oferta del destino en relación con este segmento, fidelizando mercados ya maduros y trabajando en la búsqueda de otros nuevos. En definitiva, mejorar la competitividad del destino con acciones más innovadoras y de calidad.

También se puso sobre la mesa la

necesidad de impulsar acciones que lleven a la agilización de los visados con respecto a algunos países, algo que podría redundar en un incremento del volumen de estudiantes que pudieran llegar a nuestro destino para aprender el idioma. En este sentido la entidad ya ha mantenido contacto con la Subdelegación, a la que ha transmitido esta necesidad. Málaga cuenta con 18 centros de enseñanza del español como lengua extranjera que o bien pertenecen a la ACEM o a la Federación Española de Escuelas de Español para Extranjeros.



Ana López, presidenta de Ielco, en uno de sus frecuentes viajes a Doha, la capital de este emirato árabe.

La constructora malagueña Ielco da el salto a Catar y opta a tres contratos



NURIA TRIGUERO

✉ ntriguero@diariosur.es

La empresa da sus primeros pasos en el país árabe con la filial Ielco Internacional, participada al 51% por un jeque de la familia Al-Thani

MÁLAGA. Tres años, incontables viajes y mucho tesón han sido necesarios para que la presidenta de Ielco, Ana López, pueda anunciar con orgullo: «Estamos en Catar». La constructora de los hermanos López Caparrós no ha elegido un país fácil para dar sus primeros pasos fuera de España. La lejanía, las diferencias culturales e idiomáticas y la rígida burocracia de este país árabe la han obligada a redoblar esfuerzos, pero ahora éstos empiezan a dar frutos. Su filial Ielco Internacional, con sede en Doha y participada al 51% por un jeque de la familia Al-Thani, ya se ha presentado a sus tres primeros concursos públicos para acceder a obras públicas en uno de los emiratos más ricos y avanzados de Oriente Medio.

Uno de los contratos en los que más expectativas tiene puesta Ielco es un paquete de actuaciones en 54 colegios cataríes, que suma un presupuesto de unos 5 millones de euros. «Queremos empezar con obras de no demasiado volumen. De hecho, nos han invitado a presentarnos a grandes contratos pero no hemos querido. Creemos que lo más importante es cumplir con nuestros primeros tra-

bajos perfectamente para tener buena reputación», explica Ana López.

La presidenta de Ielco no sabe decir con exactitud qué le llamó la atención de Catar, allá por 2008, cuando decidió, sin haber pisado nunca el país, que quería empezar por allí su expansión internacional. Por entonces, la crisis en España aún solo era una «desaceleración», pero ella ya intuía que las cosas se iban a torcer, y mucho, para el sector del ladrillo. De ahí su empeño en buscar oxígeno en el extranjero. «Creo que vi en televisión que Catar es un país bastante liberal y que da mucha importancia a la educación, aparte de que iba a invertir mucho en infraestructuras», recuerda. ¿Por qué no eligió Dubai, el emirato más famoso? «Allí ya está todo hecho, hay que elegir países con potencial de crecimiento», responde.

En 2009, López convenció a otras cinco empresas para formar un consorcio -Andalusian CBG se llamaba- y tantear el mercado catarí en una misión comercial organizada por la Cámara de Comercio. Aquella iniciati-

va conjunta no fructificó, pero la empresaria quedó más convencida de su proyecto después de pisar suelo catarí. Su entusiasmo acabó contagiando a sus hermanos, copropietarios de Ielco, y en 2011 la empresa comenzó a trabajar para implantarse en el emirato. «Las cosas nunca pasan por casualidad. Uno de los contactos que hice en aquella misión comercial me brindó la oportunidad de conocer al jeque con el que nos hemos asociado», confiesa.

Socio local

Las compañías extranjeras solo pueden instalarse en el país árabe si se asocian con un catarí, que debe poseer la mayoría accionarial. «El control de la empresa es nuestro, pero si no pagamos algo, nuestro socio debe hacerse cargo de la deuda, así que hemos tenido que conseguir que confíen en nosotros», explica López, que opina que por mucho que se hable ahora de la internacionalización, cualquier compañía no puede dar este paso. «Tienes que ser solvente, para

que los bancos, los socios y clientes locales confíen en ti», argumenta.

Tras la constitución de Ielco Internacional en junio de 2012, vinieron muchos meses de burocracia para conseguir todos los permisos y calificaciones necesarias para poder licitar obra pública. Al frente de la filial de Ielco en Catar está Carlos Porras, un ingeniero con valiosa experiencia internacional. No está solo: la propia Ana López le acompaña durante una semana cada mes. «En el momento en que nos den una obra enviaremos a técnicos nuestros desde Málaga. Los obreros tienen que ser contratados desde allí: normalmente son nepalíes, paquistaníes, indios y filipinos que se contratan en origen», explica la presidenta de Ielco.

La constructora malagueña aspira a ir compensando la inactividad del mercado de obras públicas español -que va para largo- con la pujanza del de Catar. Y para cuando su primera filial internacional se consolide, Ana López ya tiene en mente la segunda: Omán.

«No he tenido ningún problema por ser mujer»

Ana López está acostumbrada a ser la excepción femenina en un sector tan masculinizado como el de la construcción. Quizá por eso no considera extraordinario ni incómodo ser la única mujer en los ambientes empresariales cataríes. «No he tenido ningún problema por ser mujer. Al contrario, me respetan y me muestran más de-

ferencia», asegura la presidenta de Ielco, que se confiesa «fascinada» por este país. Es fácil creerla al ver los cientos de fotografías de sus viajes que atesora en su iPad.

De su cultura de los negocios valora que se dé importancia «al trabajo bien hecho» y que los procesos de licitación sean escrupulosamente imparciales. «Si quieres hacer una consulta, la tienes que hacer por escrito y la respuesta se la envían a todos los competidores», afirma. Lo que sí echa de menos es más apoyo del Estado español a los empresarios en Catar.

LA EMPRESA

► **Historia.** Fue fundada en 1988 por los hermanos López Caparrós. Este año es su 25 aniversario.

► **Actividad.** Obra civil y edificación.

► **Experiencia.** Ha realizado obras tan conocidas como la remodelación de la calle Larios o el parque penitenciario de la Concepción.

► **Facturación.** Llegó a superar los 30 millones de euros anuales. En 2012 fue de 14 millones.

Aertec, a velocidad de crucero en su expansión internacional

Con los nuevos contratos de Colombia, Bélgica y Marruecos, la consultora aeronáutica ya tiene el 65% de su negocio fuera

INGENIERÍA

NURIA TRIGUERO

✉ ntriguero@diariosur.es

MÁLAGA. Un total de 78 aeropuertos repartidos por los cinco continentes cuentan ya con referencias de Aertec, la consultora de ingeniería aeronáutica fundada hace 16 años por Vicente Padilla y Antonio Gómez-Guillamón. Una cifra que refleja el nivel de globalización alcanzado por esta empresa malagueña, que tiene ya el 65% de su cartera de contratos en el extranjero. Contrato a contrato, el mercado ha ido dando la razón a estos dos ingenieros, que fueron tachados de locos por más de uno cuando decidieron dejar sus trabajos en multinacionales para pilotar su propio proyecto empresarial desde Málaga.

Su facturación anual superará previsiblemente en 2013 los 16 millones de euros, frente a los 12 del año pasado. «Es un buen momento», reconoce Gómez-Guillamón. «El desarrollo internacional requiere su tiempo, hay que generar confianza, y nosotros cosechamos frutos ahora». La compañía celebra la reciente obtención de contratos en Sudamérica, Bélgica y Marruecos.

A medio plazo, su estrategia es clara: «Queremos ser una empresa con cobertura europea. Para eso tenemos que estar en los países fundamentales para la industria aeronáutica, que son Alemania, Francia, Reino Unido y España, y desde allí cubrir otros países como Bélgica, que es donde más trabajo tenemos en la actualidad», explica el cofundador de Aertec. Precisamente en dicho país la firma tiene nuevos proyectos de diseño de infraestructuras aeroportuarias para los Aeropuertos de Lieja y Charleroi. Por un lado la UTE formada con las empresas locales Greisch y Bevacel ha resultado adjudicataria del proyecto de diseño de una nueva



Vicente Padilla y Antonio Gómez-Guillamón, cofundadores de Aertec. ■ SUR

LA EMPRESA

► **Fundación.** 1997.

► **Actividad.** Ingeniería y consultoría especializada en aeropuertos, transporte aéreo e industrias aeronáuticas.

► **Facturación.** 12 millones de euros en 2012. Este año prevé alcanzar los 16.

► **Plautilla.** Más de 300 profesionales, en su mayoría ingenieros.

► **Experiencia.** Tiene referencias en 78 aeropuertos internacionales repartidos por quince países.

► **Oficinas.** Reino Unido, Francia, España, Portugal, y Marruecos.

plataforma para aeronaves en el Aeropuerto de Lieja. También en Bélgica, y una vez concluida la redacción del plan director del Aeropuerto de Charleroi por Aertec, la misma firma ha recibido el encargo de iniciar el proyecto de la ampliación de su terminal.

Reino Unido

Otro de los lugares donde más ha trabajado es Reino Unido. Aeropuertos como Heathrow, Luton, Gatwick, Birmingham, Cardiff, Derry o Guernsey, han recurrido a sus servicios. De ahí su reciente decisión de constituir una filial y una oficina propia en el país anglosajón. «La tradición aeronáutica británica y nuestra trayectoria en el Reino Unido hacen que la decisión de implantar una oficina propia cobre un sentido estratégico», afirman desde la consultora.

Esta estrategia basada en Europa no quiere decir que no se aprovechen oportunidades de negocio en otras zonas, como América del Sur. Aertec ha sido elegida por la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia (ANI) en consorcio con una firma mexicana y otra colombiana, para desarrollar los estudios que determinen la viabilidad técnica, financiera y legal de entregar en concesión cinco aeropuertos del país. El objetivo de esta labor consultora, que durará 16 meses, es definir el monto adecuado para las inversiones de cada uno de los aeropuertos.

Por último, es el Norte de África la compañía ha iniciado en Marruecos la definición de la estrategia de desarrollo del bipolo aeroportuario Benslimane-Tit Mellil, de Casablanca.

ANDALUCÍA

Novasoft ultima la refinanciación de su deuda para eludir el concurso

EN OCTUBRE PRESENTÓ EL PRECONCURSO/ El grupo asegura que está a punto de alcanzar un acuerdo con la banca y los proveedores. Sufre una morosidad de las Administraciones Públicas de 11 millones de euros.

Juan Alberto Gómez, Málaga

Tras cuatro meses de negociaciones para evitar el concurso, Novasoft está a punto de alcanzar acuerdos con sus principales proveedores y se encuentra muy cerca también de hacerlo con las entidades financieras (una decena). El objetivo es poder garantizar la viabilidad de su división de ingeniería, el core de la compañía, que se acogió al artículo 5 bis de la Ley Concursal el pasado octubre.

La tecnológica presidida por Francisco Barrionuevo ha abordado un profundo proceso de reorganización interna y ha sentado las bases de "un nuevo modelo de negocio", señalaron ayer desde el grupo. El plan de viabilidad, diseñado por una de las consultoras Big Four, ha sido presentado a los acreedores y "ha tenido una buena aceptación".

Al cierre de 2011, la compañía mantenía una deuda financiera que ascendía a 14,1 millones de euros, junto a un volumen de impagos a los acreedores comerciales de casi 20 millones.

Pese a un "nefasto último cuatrimestre", Barrionuevo respira aliviado: "Notamos que las Administraciones empiezan a pagar". No obstante, el sector público —especialmente la Junta andaluza y la de Castilla-La Mancha— le debe once millones de euros por trabajos ejecutados.



Francisco Barrionuevo, presidente de Novasoft. / J.A.G.

La deuda a corto, en especial la referida a líneas de anticipos de facturas, ha menguado de forma considerable pasando "de siete millones de euros (octubre del año pasado) a prácticamente cero", apuntó el fundador de la firma. Los créditos hipotecarios o renting de activos, vinculados al pasivo patrimonial (sedes y edificios de la compañía) se mantienen. En este apartado, Barrionuevo destaca la gran "comprensión" de las entidades implicadas, en especial de Banco Santander, su principal acreedor.

La reorganización interna se ha centrado en ajustar al

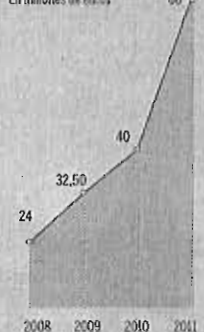
La tecnológica ha reducido la plantilla desde 1.100 trabajadores a los 800 actuales

máximo la plantilla, que ha pasado de 1.100 empleados iniciales a poco más de 800. No ha aplicado medidas suplementarias colectivas al ERTE de seis meses ya concluido, pero sí ha realizado ciertos ajustes laborales a través de bajas voluntarias o extinción de contratos puntuales.

"Más que implementar un nuevo modelo de negocio,

FACTURACIÓN DEL GRUPO

En millones de euros



Fuente: Elaboración propia. Fuente: Expansión

Está intentando ampliar negocio en Sudamérica, donde ha conseguido los primeros contratos

salidas de caja desorbitadas por la insolvencia de las comunidades autónomas".

En paralelo, la empresa malagueña está dedicando sus esfuerzos, humanos y económicos, a abrir negocio fuera de España, especialmente en Latinoamérica. De momento ha obtenido contratos en México, Chile y Panamá por valor de más de dos millones de euros.

Diasoft, en el juzgado

Otro de los conflictos que mantiene abiertos el grupo y que está en los tribunales es la compra de Diasoft, antigua filial TIC (tecnologías de la información y la comunicación) de Grupo Sánchez-Ramade. Sobre este punto, Barrionuevo apuntó a "discrepancias en el último pago" que justificó por la detección de "defectos" en las cuentas de la firma adquirida. "Los balances no se corresponden con lo que nos enseñaron", añadió.

De las tres anualidades previstas, Novasoft ha hecho efectiva dos y ha dejado pendiente la tercera. "Será el juez el que dictamine qué debe hacerse", concluyó.

Novasoft persigue más que nunca priorizar la orientación a resultados y cumplir con los proveedores", señaló Barrionuevo.

Por este motivo, en el mercado doméstico mantendrán únicamente aquellos clientes "de alta fidelidad y calificación crediticia razonable". Según resaltó, los nuevos proyectos y operaciones se ajustarán a "estrictos criterios de caja y solvencia financiera".

El fundador de Novasoft también entona el mea culpa. "En 2011 vendimos más que ningún otro ejercicio, pero en realidad no eran sino proyectos tóxicos que provocaban

Sábado 16.02.13
SUR

Declaran en concurso de acreedores a la inmobiliaria de Kristina Szekely

La empresaria, con más de 30 años de trayectoria en Marbella, descarta la quiebra y asegura contar con activos para afrontar la deuda

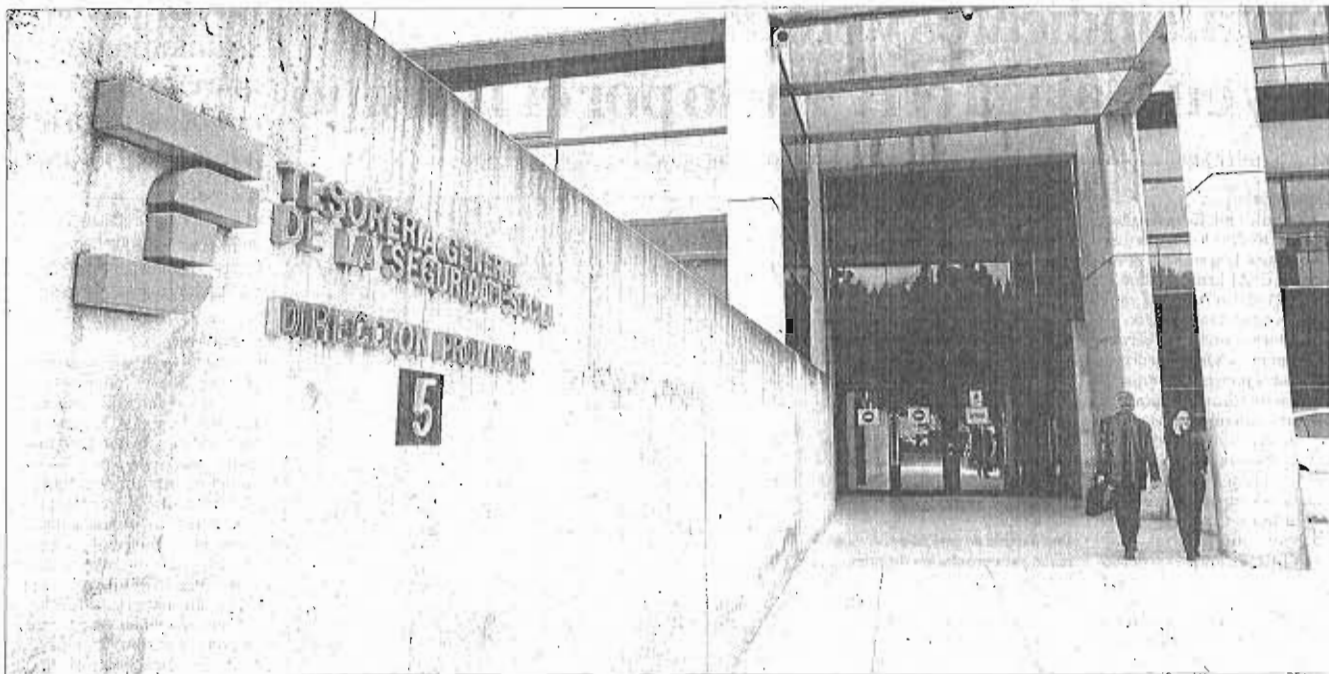
■ **HÉCTOR BARBOTA**

MARBELLA. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga ha declarado en concurso de acreedores necesario a la inmobiliaria KS Investments, de la empresaria radicada en Marbella Kristina Szekely. El auto, dictado el 31 de enero y recogido en un edicto publicado en el BOE el pasado lunes, establece que la empresa conserva las facultades de administración y disposición de su patrimonio, aunque sometida a la intervención de la administración concursal. El juzgado ha abierto un plazo de un mes para que los acreedores pongan en su conocimiento la existencia de los créditos.

La titular de la empresa, que mantiene actualmente una nómi-

na de 30 trabajadores con tres locales situados en Puerto Banús, Sotogrande y Madrid, ha descartado de plano que la entrada en concurso de acreedores vaya a suponer el final de esta inmobiliaria, una de las más prestigiosas de la Costa del Sol, con más de 30 años de trayectoria en la comercialización de viviendas de lujo y que llegó a tener antes del inicio de la crisis cinco locales y unas 150 personas en nómina. «Vamos a seguir, el concurso de acreedores nos dará tiempo para asumir la deuda que tenemos», dijo anoche la empresaria a este periódico, y aseguró que el movimiento que ya se está produciendo en el mercado inmobiliario de Marbella permite albergar expectativas optimistas.

Szekely atribuyó la situación a la que ha llegado la sociedad a su empeño en mantener la estructura empresarial durante los primeros años tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. «Nunca habíamos tenido una crisis tan gorda ni tan larga, no sabíamos que nos iba



La sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Málaga, donde se pactan los aplazamientos. CARLOS CRIADO

La Seguridad Social pacta el aplazamiento de deudas con 300 empresas al mes

► En 2012 se registraron más de 3.572 aplazamientos negociados con morosos, el doble que antes de la crisis, por una deuda global de 40 millones de euros ► El 95% de los débitos son menores a los 90.000 euros, con una media de 11.200 por deudor ► Comercio, turismo y construcción, los sectores clave

La mayoría de los impagos son por pura imposibilidad aunque también se dan los casos de «defraudadores profesionales»

la hora de negociar, la Seguridad Social pide a estas empresas, por un lado, unas garantías que cubran el importe y, por otro, que se pongan al día en la cuota obrera, es decir, que ingresen en la Seguridad Social la parte que les han retenido a los trabajadores en el sueldo. A cambio, la Tesorería suele dar siempre el plazo máximo que permite la ley, que es de cinco años, para que se abone su deuda de cuota patronal.

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÁLAGA

La crisis y la acuciante falta de liquidez están llevando a miles de empresas a incumplir sus obligaciones con la Seguridad Social, lo que les obliga a pedir un aplazamiento de sus deudas para impedir el embargo de sus bienes. La Seguridad Social pactó el pasado año 2012 con casi 300 empresas malagueñas morosas al mes el pago fraccionado de una deuda que alcanzó un volumen global de más de 40,4 millones de euros, según datos facilitados por el Ministerio de Empleo que dejan claras las dificultades de tesorería que sufre el tejido productivo de la provincia.

Los 3.572 aplazamientos negociados el pasado año no suponen un récord dentro de esta época de crisis -en 2011 se firmaron casi 4.000, con una deuda global aplazada de 45 millones- pero sí mantienen los niveles de morosidad por todo lo alto. De hecho, los pactos que el Ministerio de Empleo ha tenido que firmar con empresas morosas en 2012

duplican los registrados en 2006, cuando todo era abundancia. Y desde que estalló la crisis son más de 16.300 compañías de la provincia las que han tenido que acudir a la Tesorería de la Seguridad Social a negociar este aplazamiento in extremis. Negocios de hostelería, constructoras y empresas de servicios suelen ser algunas de las firmas que más desfilan por la Seguridad Social, con deudas de lo más variopintas: desde los 3.000 euros de un autónomo que tiene trabajadores a su cargo hasta los varios millones que puede deber una empresa con una plantilla significativa de empleados.

En años anteriores fueron los propios ayuntamientos los que acudieron a pactar los aplazamientos, con casos sonados como los de Torremolinos, Estepona y Manilva. Pero la realidad es que las grandes deudas son casos contados, ya que el 95% de estas empresas presentan débitos inferiores a los 90.000 euros. La deuda media negociada el pasado año no

LAS CLAVES

La cuota obrera y la cuota patronal, obligaciones de empresa

1 El único requisito a las empresas para renegociar sus deudas es que se pongan al día de la parte inaplazable de los pagos, y que hace referencia a la cuota obrera, es decir, ese 23,6% que cotizan al mes por cada trabajador en relación a su salario. La otra parte, la que les corresponde como empresarios, es la que se negocia, a pagar en un número de meses acorde con la cuantía de la deuda, aunque se está dando el máximo permitido: 5 años.

va más allá de los 11.200 euros.

Fuentes del ámbito laboral señalan que la provincia de Málaga presenta tradicionalmente una tasa de morosidad con la Seguridad Social bastante superior a la media andaluza y española, algo achacable al tirón que viene en la provincia el sector constructor e inmobiliario, el mismo y los co-

El año en que los ayuntamientos coparon la morosidad

2 El máximo de deudas negociadas por las empresas con la Seguridad Social se dio en el año 2009, con 127 millones de euros, aunque fue porque se dieron circunstancias excepcionales. El truco está en que ese año dos de las empresas morosas que negociaron sus deudas fueron nada menos que el Ayuntamiento de Torremolinos y el de Estepona, que sumaban deudas de 54 y 33 millones de euros respectivamente.

mercios al por menor, que son los que están sufriendo con más ímpetu los problemas de falta de liquidez. En muchos casos una empresa incumple con la Seguridad Social porque a su vez sufre impagos por parte de los clientes, en un destructivo círculo vicioso. En cualquier caso, la obligación de una empresa es estar al día. A

La vía ejecutiva, última opción

Sin embargo, cuando los intentos por negociar con las empresas se agotan, la Tesorería acomete los denominados procesos ejecutivos, no sin antes avisar reiteradamente a los incumplidores. Como ejemplo, en 2010 se llegaron a emitir 381.000 avisos, aunque hay que matizar que esta enorme cantidad computaba los distintos apercibimientos a un mismo moroso mes a mes. Los procedimientos ejecutivos permiten recaudar cada año alrededor de 70 millones de euros aunque el dato de este último 2012 aún no está disponible.

¿Los impagos a la Seguridad Social se producen por pura imposibilidad en la caja de las empresas y autónomos o existe también picaresca? Según las fuentes consultadas, la inmensa mayoría de los morosos sufre los estragos de la crisis pero también hay determinados colectivos que inician su actividad con la intención de no pagar desde el principio por diversos motivos, los típicos «defraudadores profesionales».

Primer trimestre de 2013 en España

Crédito al sector privado. Miles de millones de euros.



Fuente: BBVA y FUNDAS.

Importe captado en las salidas al Mercado Alternativo Bursátil (2009-2012). En miles de euros



R. C./COLPIBA

Oxígeno para las pymes

El Gobierno ultima un programa de fomento del crédito que combina medidas técnicas con incentivos a su concesión

Rajoy prevé anunciarlo este miércoles en el Debate sobre el estado de la Nación, mientras se cierra la aportación final que tendrá la banca

M. J. ALEGRE

MADRID. La reestructuración financiera emprendida en España tiene como uno de sus grandes objetivos la recuperación de la normalidad en el flujo del crédito. No se trata de volver a las disparatadas tasas de crecimiento que se alcanzaron en tiempos de la burbuja inmobiliaria, sino de aliviar la sequía de préstamos que padecen las pequeñas y medianas empresas (pymes), que está estrangulando el crecimiento.

Los mercados mayoristas del dinero se están abriendo para las grandes compañías, pero al Gobierno le toca incentivar el crédito a las pymes. El miércoles, en el Debate sobre el estado de la Nación, el presidente Mariano Rajoy prevé desgajar propuestas que irían desde la creación de un nuevo mercado de deuda privada a la reconsideración de ciertos tipos de préstamos, pasando por un papel mayor para las entidades nacionalizadas hasta llegar, incluso, a la eventual asunción pública de una parte de las pérdidas en caso de fallos. Ideas estas últimas que chocan con la reducción del déficit y el compromiso de minimizar los costes del rescate bancario para el Estado.

El Ejecutivo presentará esta batería como un ambicioso programa global de financiación de las pymes a corto y medio plazo, pero los expertos creen que obtener frutos llevará su tiempo. Para ello ha pedido la colaboración del sector financiero: Entre otras sugerencias, sobre la mesa destaca la flexibilización en las líneas de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para rebajar el coste de financiación en los sectores y empresas de mayor perfil de riesgo. También se estudian cambios como la re-

ducción de la fiscalidad en los documentos de giro de alta calidad para facilitar su descuento. El Ejecutivo parece bien dispuesto a fortalecer con garantías públicas la actividad de las aseguradoras comerciales (CESCE, Crédito y Caución) y también a impulsar las Sociedades de Garantía Recíproca, facilitando su concentración y su coordinación con el ICO para hacerlas más solventes y eficaces.

Los bancos le han propuesto, además, la cesión de una parte de los derechos de cobros de IVA para adelantarlos vía financiación a las empresas. Asimismo, hay una serie de medidas técnicas de notable alcance, como la reclasificación de los préstamos a las pymes entre los activos ponderados por riesgo, a fin de que su concesión consuma menos capital que otras operaciones. Incluso la Autoridad Bancaria Europea (EBA) se mueve en esta dirección.

El párrafo 27 del Memorando de Entendimiento (MoU) -el pliego de condiciones exigidas para la asisten-

cia financiera de los socios europeos- insta al Gobierno a reforzar la intermediación financiera no bancaria. En el caso de las pymes, los instrumentos habituales (emisiones directas de pagarés, bonos u obligaciones) presentan dificultades. El inversor desconfía del riesgo de impago y, de la falta de liquidez del título que adquiere, mientras la empresa se enfrenta a unos costes generalmente elevados al retribuir a quien le proporciona el dinero y pagar, por añadidura, unos gastos fijos (de estructuración de la operación y de comisiones) demasiado altos.

Mercado alternativo

El Ejecutivo va a promover la creación de un mercado alternativo de reuta fija, en el que se puedan negociar pagarés y bonos, con la idea de dar liquidez a la inversión. Arturo Rojas y Javier Pérez Somoza, economistas de Analistas Financieros Internacionales, perciben dificultades en esta alternativa a la intermediación

bancaria. Calculan que los costes solo podrían ser asumidos en las emisiones por importe superior a los cinco millones de euros. Para afrontar los riesgos, sugieren que el bono pueda emitirse con el aval explícito de la entidad colocadora. También plantean la creación de fondos de inversión que inviertan en deuda de pymes, con el incentivo de alguna ventaja fiscal, como sucede con los fondos de capital riesgo.

Desde 2009 existe en España un Mercado Alternativo Bursátil (MAB) que ofrece a las pymes de mayor dimensión una vía para captar fondos propios, Rojas y Pérez Somoza han analizado los resultados obtenidos hasta ahora y constatan que su evolución ha sido más lenta de lo esperado. Así, de las 22 empresas listadas en la actualidad, dos están suspendidas por su delicada situación financiera. En conjunto, todas captaron 90 millones de euros en sus procesos de incorporación al MAB.

Advierten estos expertos que las compañías que se han aventurado en este mercado no han encontrado complicidad suficiente en la demanda de los inversores. De manera que si los costes de salida fueron inicialmente del 8% al 10%, en las últimas operaciones han llegado a subir, como media, a porcentajes del 15% al 18%. Por ello, un importante número de medianas empresas ha desistido de acudir a esta opción.

Sin dinero fresco

El primer obstáculo para potenciar la financiación a las pymes es la falta de una estadística adecuada. «No hay información fina», advierten Jorge Sicilia y Rafael Domenech, economistas de BBVA Research. Aunque los datos del Banco de España sugieren un rebrote del crédito al sector privado, compatible con el parón del saldo vivo por el deudamiento, la realidad no se puede saber, advierten.

Y es que en las 'nuevas' operaciones crediticias hay de todo, desde refinanciaciones a subrogaciones, es decir, que abundan los aplazamientos de pago resultantes de la negociación de viejos préstamos. Todo apunta, por tanto, a la ausencia de dinero fresco. No obstante, el MoU obliga al sistema a aplicar una nueva norma de registro de los créditos a partir de marzo.

En cuanto a la dotación del plan, nada se sabe oficialmente, si bien en el sector se maneja una cifra de hasta 30.000 millones de euros en créditos en 2013 (el ICO dio 27.500 en 2012), de los cuales la banca privada -con la que aún se sigue negociando- podría llegar a aportar un tercio.

Se busca un millón de parados

Las dudas de Rosell sobre el paro real relanzan el debate sobre las formas de contar desocupados



JOSÉ LUIS GALENDE

BILBAO. Los cálculos de la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre el desempleo y el registro de los servicios públicos de empleo difieren en un millón de parados. Una diferencia tan abultada pone sobre el tapete lo difícil que es contar un colectivo como el de los parados, en especial cuando es tan abultado como en el caso de España y ha sido una vez más objeto de polémica en los últimos días.

Los datos del cuarto trimestre del año pasado del INE estiman la existencia de 5,96 millones de desocupados, mientras que en las oficinas de empleo estaban inscritos 4,98 millones. Unas cifras que han sido cuestionadas por el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, quien

ha producido una fuerte controversia que amenaza con parecerse a la fábula de los galgos y podencos de Iñarte. En opinión del dirigente empresarial, muchos parados no son tales porque están en la economía sumergida y la cifra real de desocupados estaría más cerca de los cinco que de los seis millones.

Ni calcular ni contar la cifra de parados de un país es tarea fácil ni exenta de interpretaciones, pero en los últimos años se han venido aceptando sin mayor problema la existencia de los dos métodos citados, de los que solo la EPA -estimación por medio de una macroencuesta- es utilizada para comparar la situación de España con otros países. Es, además un método más fiable y menos sujeto a manipulación según diversos fuentes.

¿Por qué? Pues porque los criterios para ser considerado parado por los servicios públicos de empleo pueden ser modificados, como ha intentado el Gobierno hace poco,



El presidente de la patronal, Juan Rosell, durante una asamblea reciente de la CEOE. :: ZUPI / EFE

mientras que la EPA resulta un mecanismo sujeto a contraste científico e internacional.

Récords absolutos

Tanto en los registros de los servicios públicos de empleo como en la encuesta del INE las cifras de paro son récords absolutos y la diferencia de un millón entre ambos métodos de medición puede tener numerosas explicaciones. La primera de todas es que se refieren a cosas diferentes. Mientras que el registro público inide el número de personas que decide inscribirse en sus listas en busca de alguna ventaja (prestaciones, subsidios, encontrar un empleo, realizar un curso...), y para ello deben estar en paro y en disposición de trabajar, la EPA pregunta en unos 200.000 hogares de toda España por la situación de uno de sus miembros que aparezca en el censo.

En concreto, la pregunta se refiere a si ha trabajado o tenido un empleo en la semana en que es consultado, y si busca activamente empleo y está disponible para incorpo-

Se puede bajar el paro por medio de una directriz interna

Los que defienden la validez de las cifras de la EPA frente a las de los servicios públicos de empleo arguyen, entre otras cosas, que el desempleo registrado en sus listas puede modificarse, al alza o a la baja, reducirse por medio de una simple directriz interna.

Algo así fue lo que intentó el Gobierno a finales del año pasado, cuando en una reunión con los responsables de empleo de las comunidades autónomas -que gestionan los registros de parados- propuso modificar los requisitos (una veintena) para que un desocupado sea inscrito como demandante de empleo en paro. La fuerte oposición de algunas comunidades autónomas impidió, según las fuentes consultadas, que se cambiaran esos criterios.

rairse a trabajar en las 14 días siguientes a la entrevista.

Pero eso no es todo, ya que la encuesta del INE no considera parada a una persona que haya trabajado 1 hora diaria la semana de la entrevista. En cambio, para inscribirse en los registros de empleo hay que buscar trabajo para más de tres meses y para más de 20 horas a la semana, entre otros requisitos como el estar disponible. Estos métodos permiten hacer una fotografía aproximada del mercado laboral. Pero si se quiere conocer el escenario en alta definición, hay que ir más allá y tener en cuenta numerosos factores. Por ejemplo, los servicios públicos de empleo no contemplan como parados a los inscritos en sus listas que están estudiando o haciendo cursos de formación pública, ni a los perceptores del subsidio agrario. Por otro lado, incluyen a decenas de miles de personas que han sido prejubiladas por sus empresas, o despedidas, y que por tener una edad avanzada su único objetivo es enlazar su prestación económica con la pensión de jubilación.

Trabajo irregular

Por otro lado, las listas que se conocen de los registros de parados recoge dos colectivos, los demandantes de empleo parados, que sumaban en el trimestre de referencia la citada media de 4,863 millo-

PARO EPA

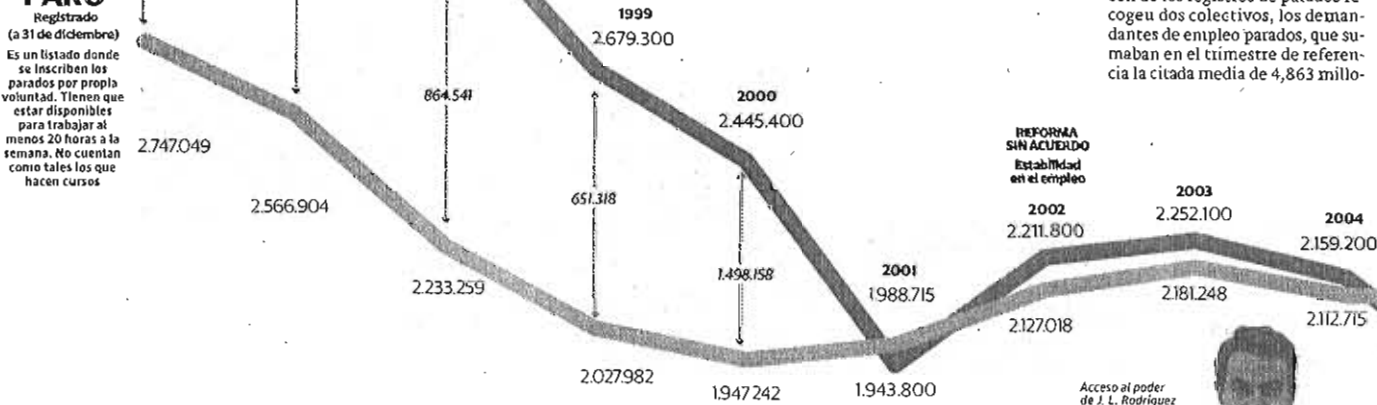
Encuesta de Población Activa (IV trimestre)

La cifra de parados se da por estimación, tras consultar 65.000 viviendas (unas 180.000 personas) que están censadas. No son parados los que trabajan una hora o más diaria en la semana de la entrevista



PARO Registrado

(a 31 de diciembre) Es un listado donde se inscriben los parados por propia voluntad. Tienen que estar disponibles para trabajar al menos 20 horas a la semana. No cuentan como tales los que hacen cursos



:: GRÁFICO JOSEMI BENÍTEZ / ISABEL TOLEDO

EL DATO

5,96

millones de parados es la estimación de la última Encuesta de Población Activa (EPA) al cierre de 2012, frente a los 4,98 millones de inscritos en las listas de los servicios públicos de empleo.

nes, y los demandantes de empleo no ocupados, que añaden cerca de 400.000 personas más a los listados. E incluso existe otro registro más nutrido, que incluye, además de los grupos citados, a los demandantes de empleo ocupados, porque quieren cambiar de trabajo, pero sobre los que no se suele informar.

Por su parte, la encuesta del INE debería reflejar a las personas que trabajan en la economía sumergida, es decir, que no cotizan a la Seguridad Social, y que por lo tanto no están paradas. Pero no está claro que lo haga.

Y el gran problema que tiene es que depende de la sinceridad y de la apreciación subjetiva del entrevistado sobre su situación, cosa que se complica cuando quien responde a las preguntas es un familiar, al no encontrarse en ese momento en el domicilio la persona seleccionada para la encuesta.

Consciente de los errores de estimación que esta situación puede acarrear, desde 2005 el INE realiza cada dos años estudios de contraste para conocer hasta dónde llega la exactitud de sus predicciones, y los resultados no pueden resultar más desalentadores.

Así, en el último que ha realizado, con datos de 2009 y publicado hace tres meses, puede verse que una parte muy importante (el 24% de la muestra tomada) de los trabajadores que dijeron en la encuesta estar inscritos en una oficina de empleo, no lo estaban en realidad, lo cual no puede generar otra cosa que estupor en los autores del trabajo.

Pero hace unos pocos años la situación era exactamente la contraria. Los parados registrados eran más que los que calculaba la encuesta del INE, lo cual podía tener una explicación, la existencia de algún tipo

de ventajas económicas y sociales para las personas en desempleo. Por ejemplo, eso sucedió entre 2005 y 2007, cuando la cifra de desempleados registrados era superior hasta en 200.000 personas a las que estimaba por entonces la Encuesta de Población Activa.

Preparar el terreno

Conocido todo esto, la pregunta que expertos, políticos, sindicalistas y hasta empresarios se han hecho la última semana es: ¿qué perseguía el presidente de CEOE al lanzar la polémica sobre la cifra de parados en un momento tan delicado? Y no cabe hablar de un 'calentón', porque fue la principal idea expuesta en una rueda de prensa restringida a la que solo habían sido invitados algunos medios de comunicación.

Dado que la intervención pública se produjo días antes de que surgiera el escándalo de los trabajadores de las empresas del vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, tampoco puede deberse a un intento de tapar un escándalo con una polémica. En cambio, según algunas fuentes consultadas, si podía estar relacionada con el aniversario de la drástica reforma laboral de Mariano Rajoy, que cumplió esta semana un año de vigencia, con un balance, hasta el momento, desolador (despidos más fáciles, más flexibilidad, cambios profundos en los convenios... y todo ello para que el paro registrado haya crecido en 381.000 personas (692.000 según el INE) y se hayan destruido 779.000 puestos de trabajo, según los registros de la Seguridad Social.

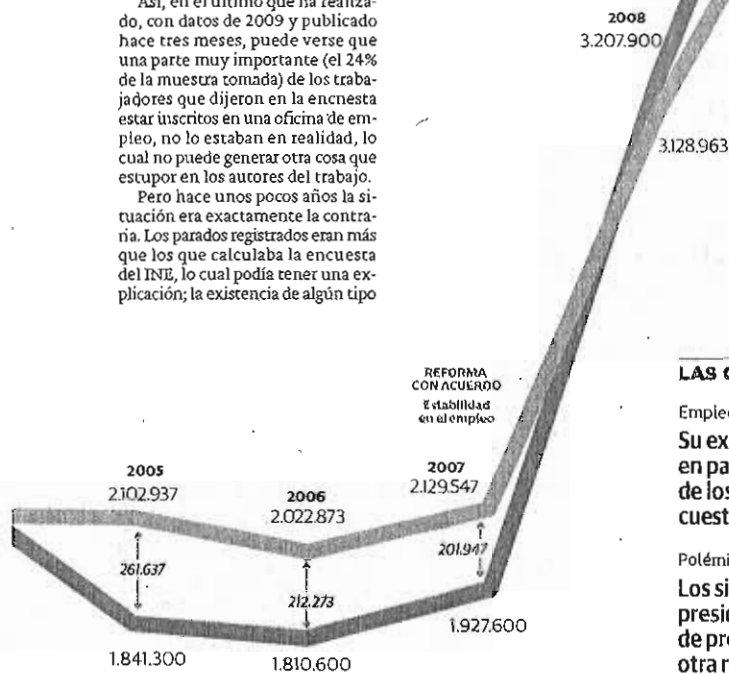
Para Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT, detrás de la polémica lanzada por Rosell se encuentra la intención de aportar argumentos para «dar una nueva vuelta de tuerca al mercado laboral», con otra reforma, con «despidos más ba-

ratos, nuevas fórmulas de 'mini-jobs', etcétera. La idea oculta, apuntan otras fuentes, sería la siguiente: dado que los trabajadores están en la economía sumergida, lo que hay que hacer es descargar a las empresas de los impedimentos que les llevan a emplearlos sin darlos de alta en la Seguridad Social.

También, añade Ferrer, otro objetivo podría ser cuestionar implícitamente la protección del desempleo, que alcanza a casi tres millones de parados, precisamente con el argumento implícito de que hay muchos que no están realmente desocupados. Y lo mismo cabe hablar de los fondos que se destinan a determinadas políticas de empleo, añade, que buscaría que fueran a potenciar las ayudas a las empresas. En otras palabras, un argumento recurrente del ultraliberalismo que encarna», precisa.

La intervención de Rosell fue, además de poco afortunada, crítica, puesto que la EPA ha sido puesta

como ejemplo de encuesta por Eurostat recientemente. Incluso rayó el presidente de la CEOE la temeridad al hablar justo cuando se estaba debatiendo en Europa el presupuesto de la UE, del que debían salir fondos para España relacionados con su elevado nivel de paro (Fondo Social Europeo, Fondos de Cohesión, ayudas para el paro juvenil...).



Los diques que evitan una explosión social

de J. L. GALENDE

BILBAO. Detrás de la polémica sobre el número real de desempleados se esconde una pregunta muy frecuente que avaría las tesis de Juan Rosell: ¿puede un país soportar una tasa de paro superior al 25% sin que se produzca una explosión social? Pues bien, las fuentes consultadas están de acuerdo en que la cifra buena es la de Estadística, la de los seis millones de desocupados, aunque coinciden en que si la sociedad lo soporta es por los elevados niveles de actividad laboral informal o sumergida.

El catedrático de Sociología Ander Gurruchaga cree que el debate sobre cuál es el número de parados «no lleva a ninguna parte, porque en todo el mundo occidental es la encuesta de población activa la fórmula válida, a la que se reconoce legitimidad metodológica y científica». En el caso de los registros de parados, precisa este experto, el inscribirse en sus listas es una acción voluntaria, que puede llegar a estar condicionada por muchos factores.

De hecho, los listados de los servicios públicos de empleo pueden variar por varias causas, como el simple hecho del comienzo de cursos de formación de parados.

Para Gurruchaga, lo que no ofrece duda es que el paro está en España en torno al 25%, «una enormidad» que considera una «reali-

dad sociológica estructural». Y ve cuatro causas por las que la sociedad española resiste una situación de este tipo. La primera son los trabajadores en la economía informal, que suman ingresos, casi siempre poco importantes, a la renta familiar. La segunda tiene que ver con los numerosos sistemas sociales de apoyo, tanto municipales como autonómicos y estatales.

La tercera, enfatiza, es la familia, cuyas rentas son redistribuidas entre todos sus miembros; y, por último, cita la red social que constituyen los amigos y las personas próximas, que también son fuentes de ayuda. Todos ellos son un colchón, concluye, aunque no resuelven el problema.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, defiende también la validez de la EPA frente a los registros de parados, que es el «método utilizado en las sociedades más avanzadas».

También coincide en que una de las causas para que el elevado paro no haya provocado una explosión social es la economía sumergida, y coincide, asimismo, en que la familia se ha convertido en auténtica válvula de escape de esa olla a presión que es el paro. Una prueba de ello, precisa, es que la gente que se va fuera de España es la que no tiene una red familiar de sostén: los inmigrantes.

LAS CLAVES

Empleo sumergido
Su existencia explica en parte la supervivencia de los parados, aunque cuestiona la EPA

Polémica de Rosell
Los sindicatos acusan al presidente de la patronal de preparar el terreno para otra reforma laboral



>> A FONDO

> EL COMIENZO DE UNA CARRERA EN UGT

1970. Cándido Méndez se afilia este año, con sólo 18 años de edad, a UGT y al PSOE. Ingeniero técnico en Química, al acabar la carrera en 1975 se afilia a la Federación de la Construcción de la Unión General de Trabajadores.

1980. Tan sólo cinco años después, y tras pasar por la ejecutiva provincial del sindicato, este extremeño que hoy cuenta con 61 años, alcanza la Secretaría General de Jaén.

> SU 'PRIMERA HUELGA'

El 20 de junio de 2002 tuvo lugar el primer paro general con Méndez a frente de UGT. La anterior (en enero de 1994) fue justo antes de su elección.



> HACIA LA CUMBRE

En 1980, Méndez logra un escaño en el Congreso de los Diputados. Lo mantiene durante dieciséis años.

1986. El Congreso Regional de UGT-Andalucía elige secretario general. Es ratificado en 1990. Entre 1986 y 1987, ocupa escaño en el Parlamento andaluz.

CERCO A LA OPACIDAD DE LOS SINDICATOS

Los sindicatos han perdido casi medio millón de afiliados entre 2008 y 2010. Reciben, junto a la patronal, 3.000 millones de euros para cursos de formación, pero nadie controla sus cuentas. Por Francisco Núñez

Después de casi 36 años de su legalización (27 de abril de 1977) los números de los sindicatos siguen siendo opacos. Ninguno de ellos —de clase, corporativo, profesional o del sector público— rinde cuentas ni emite información alguna. Ni siquiera de las subvenciones que reciben del Estado, a las que se han sumado las de las autonomías y ayuntamientos. El caso más grave corresponde a CCOO y UGT, los receptores principales de estas ayudas públicas que se han ido ampliando. Por ejemplo, todavía tienen, junto a la CEOE, el monopolio de los cursos de formación para parados y empleados.

Haecce unos días, tras el escándalo de los presuntos pagos en negro en el PP y la publicación de las cuentas del partido de los últimos años, así como las declaraciones de impuestos de Rajoy, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, invitó a los demás partidos y centrales sindicales a hacer ese ejercicio de transparencia. «Que valoren si ha lle-

cional del Congreso que la Ley de Transparencia que prepara el Gobierno «alcance también a las entidades de naturaleza privada que reciben volúmenes de fondos públicos y cuya actividad tenga interés público o repercusión social». En este marco se encuentran los sindicatos, la CEOE e incluso las ONG.

Curiosamente, según reconocen fuentes del Tribunal, al legislador se le había olvidado incluir en la norma que regula esta institución la comprobación de las cuentas de estas organizaciones. Así, los sindicatos aún dicen que son entidades ajenas al control del órgano fiscalizador, ya que se les considera privadas.

En opinión de Álvarez de Miranda, no basta con incluir en la Ley de Transparencia este control, ya que está pensada exclusivamente para el sector público. «Presentaría graves dudas de aplicación», señaló. Por ello, estima «más razonable» que la obligación de transparencia de las cuentas de los sindicatos se incluya en leyes específicas, obligándoseles, además a dar más información en sus páginas web. Así, estas organizaciones deberán rendir cuentas por recibir subvenciones del Estado. Hasta ahora, el Tribunal de Cuentas sólo fiscalizó en una ocasión algunas partidas relacionadas con las centrales sindicales. En 2003 concluyó la auditoría de la Fundación para la Formación Continua (Forcem) en relación a la gestión de este organismo por parte de CCOO, UGT y CEOE entre 1996 y 1998. La investigación puso al descubierto 59.000 alumnos inexistentes, facturas falsas y cursos jamás impartidos y exigió la devolución de más de dos millones de euros.

Los sindicatos de clase son los que más ocultan sus cuentas, sobre todo ahora que, como cualquier empresa, se están viendo obligados a realizar ERE para aprovechar la reciente reforma laboral y aligerar plantilla ante la merma de recursos. El caso es que nada se sabe de sus presupuestos, gastos de personal o componentes de su plantilla. Ni siquiera hay dato alguno sobre las nóminas de

EL TRIBUNAL DE CUENTAS QUIERE UNA LEY ESPECÍFICA PARA LAS CENTRALES

CCOO PROPONDRÁ EN SU PRÓXIMO CONGRESO PUBLICAR SUS CUENTAS

gado el momento», señaló en referencia a la opacidad de los sindicatos en difundir lo que cobran del sector público, de los servicios y asesoramiento que prestan, así como de los ingresos que obtienen por las cuotas de sus afiliados.

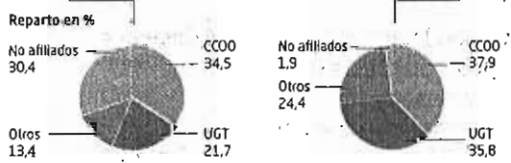
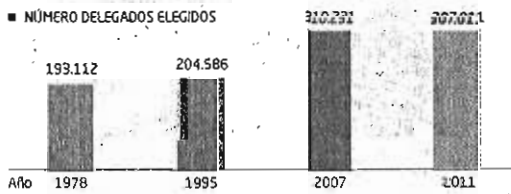
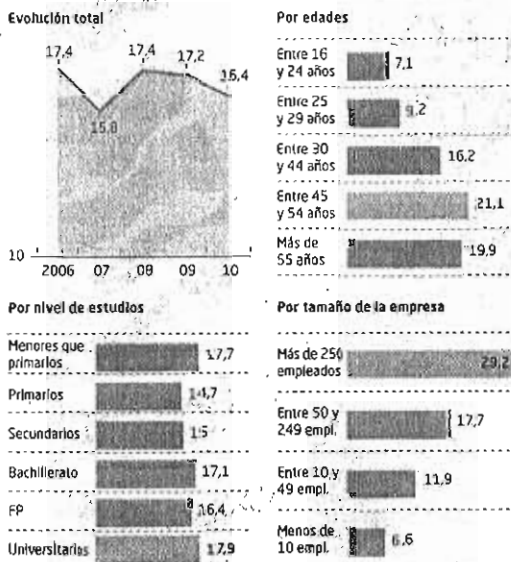
Lo que parece evidente es que hace 36 años hubo que crear con dinero público una estructura sindical que no existía, también política y empresarial, y ya toca que sea transparente y que rinda cuentas ante los organismos competentes. En este sentido, Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, es decir, la institución encargada de la fiscalización pública, pidió el pasado martes en la Comisión Constitu-

ción Continua (Forcem) en relación a la gestión de este organismo por parte de CCOO, UGT y CEOE entre 1996 y 1998. La investigación puso al descubierto 59.000 alumnos inexistentes, facturas falsas y cursos jamás impartidos y exigió la devolución de más de dos millones de euros.

Los sindicatos de clase son los que más ocultan sus cuentas, sobre todo ahora que, como cualquier empresa, se están viendo obligados a realizar ERE para aprovechar la reciente reforma laboral y aligerar plantilla ante la merma de recursos. El caso es que nada se sabe de sus presupuestos, gastos de personal o componentes de su plantilla. Ni siquiera hay dato alguno sobre las nóminas de

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SINDICAL

■ AFILIADOS A LOS SINDICATOS
En % de trabajadores ocupados según el grupo



FUENTE: Ministerio de Empleo y Seg. Social.

Albano Hernández / EL MUNDO

sus cargos directivos.

En octubre de 2009, en el programa de TVE *Tengo una pregunta para usted*, el secretario general ugetista, Cándido Méndez, declaró ganar al mes «2.257 euros una vez deducido el 22% del IRPF y el 6,4% de las cotizaciones sociales». Estos ingre-

sos netos equivalen a unos 50.000 euros brutos anuales. Una cifra similar, quizá algo inferior, como reconocen miembros del sindicato, recibe Ignacio Fernández Toxo, unos 2.300 euros netos mensuales.

Tampoco se conocen los ingresos que perciben, tanto públicos, o por el

cobro de la gestión jurídica y de asesoramiento a los trabajadores en la tramitación de ERE. Lo más llamativo es, sin embargo, el destino de esos más de 3.000 millones anuales en que se eifran los recursos públicos para políticas activas que gestionan por impartir cursos de formación, junto a la CEOE. A ello hay que sumar los cursos para desempleados.

Sin embargo, el Gobierno está preparando cambios. Pretende repartir las subvenciones de esos cursos de formación con «otros centros y entidades privadas de formación debidamente acreditados». Así figura en el Programa Nacional de reformas enviado a Bruselas y en la reforma laboral. Falta su desarrollo.

Todo esto significará una merma importante de ingresos que se suma a la dificultad de seguir obteniendo recursos con el cobro de los ERE ya que el Gobierno ha suprimido su trámite administrativo.

«No tienen un euro», señala una fuente que se han sentado en muchas mesas negociadoras. Además, están perdiendo peso en la negociación colectiva porque la tendencia es ir hacia convenios de empresa y la reforma laboral permite los descuelgues. Y los recursos son cada vez más limitados porque la crisis les está pasando una dura factura.

Según la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, elaborada por Empleo, entre 2008 y 2010 los sindicatos habían perdido 497.956 afiliados ocupados. La cifra hasta 2012 supera los 700.000, según las fuentes consultadas. Esta Encuesta señala además que sólo están afiliados a las centrales el 16,4% de los trabajadores; que los jóvenes de menos de 30 años no confían en la representación sindical; que los sindicatos se nutren de personas con poca formación y cualificación; y que es en el sector público donde más se acumula el caldero sindical (uno de cada tres empleados públicos está afiliado). Un informe interno de CCOO menciona además que se ha reducido el número de delegados y que el 40% de éstos no están afiliados.

Para preparar el terreno, CCOO anuncia que en el próximo congreso propondrá publicar sus cuentas y aplicar una poda entre sus dirigentes, de 45 a 11. Y pide una revisión de la ley del patrimonio sindical acumulado para vender edificios.

>> A FONDO

> 1994: EL AÑO DE LA SECRETARÍA

72,25%. Con este porcentaje devotos de los delegados (el 25% restante se abstuvo), Méndez acaba por convertirse en secretario general en el XXXVI Congreso Confederado de UGT, en abril de 1994. Sustituye a Nicolás Redondo, quien había roto en diciembre de 1988 la alianza que el sindicato mantenía con el PSOE de Felipe González. 1997. Este año es elegido para ocupar la vicepresidencia de la Confederación Europea de Sindicatos.

> SU 'ÚLTIMA HUELGA'

«El 14-N es una huelga de autodefensa que se convoca en el momento que más lo necesita la sociedad», dijo respecto al paro del 2012.



> EN LA CÚPULA

Reelección. Méndez ha sido reelegido secretario de UGT en 1995, 1998, 2002, 2005 y 2009. Además, en el X Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos de mayo de 2003 es escogido como presidente, cargo que ostenta hasta 2007.



Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo, durante su última visita a La Zarzuela. / JOSÉ AYMA

> LOS SINDICATOS, ANTE SU RENOVACIÓN

UN MANDATO MÁS AL FRENTE

La ausencia de alternativas significadas indica que los congresos confederales de UGT y CCOO confirmarán a Toxo y Méndez cuatro años más. Por Ana Bravo Cuiñas

Comisiones Obreras y UGT afrontan este año sus respectivos congresos confederales. En estas citas cuatrienales, que son el estadio final de procesos de más de un año, además de debatir los programas de acción y los estatutos, se elige —o reelige— al secretario general. La elección del líder recae en los varios cientos de delegados, 780 en el caso de CCOO y 800 en el de UGT —designados mediante

comicios que se han ido celebrando a todos los niveles de la organización y en sentido ascendente.

De confirmarse todos los pronósticos, y nada parece indicar lo contrario por la ausencia de alternativas significadas, tanto Ignacio Fernández Toxo como Cándido Méndez seguirán al frente de CCOO y UGT cuatro años más. Quienes conocen a fondo el mundo sindical creen que la

crisis, la económica pero también la de legitimidad que afrontan, ha hecho las filas más prietas. Sin embargo, y como es costumbre, la confirmación de sus candidaturas se reserva para la recta final del proceso.

Tras casi dos décadas y cuatro legislaturas al frente de UGT, Cándido Méndez «todavía no ha presentado su candidatura, aunque tampoco se ha abierto el plazo», precisan desde

el sindicato, que celebra su 41º Congreso entre el 10 y 13 de abril.

En la organización afirman que «la renovación depende de la voluntad de los afiliados». Y explican que «en ninguna organización de matriz socialdemócrata hay límites para el relevo». No obstante, entre las «más de 4.000 enmiendas a los Estatutos» que se están a debate, «hay dos que plantean revisar el modelo».

La introducción de un límite de mandatos es un debate recurrente en UGT «desde la época de Nicolás Redondo», tal y como aseguran desde la Ejecutiva. Las mismas fuentes explican que en el año 94 —cuando Méndez asume la secretaría general— «sí se produce un relevo generacional respecto a aquellos líderes que habían llegado a la dirección del sindicato tras el franquismo». Por lo tanto, «el debate sobre la continuidad en los dos congresos siguientes a la elección de Cándido no era prioritario» y «sí comenzó a hacerse visible a partir de su tercer mandato».

En cualquier caso, «un sindicato también se renueva por capas», recuerdan, «y esa renovación viene produciéndose ya a nivel de uniones y federaciones sectoriales y territoriales, por lo que llegará a la Ejecutiva». En la actualidad, existen dos mujeres en el máximo órgano de gobierno de la UGT con menos de 40 años: la secretaria de Política Territorial, Ana Micó, y la de Medio Ambiente, Isabel María Navarro. Nada hace pensar que alguna de ellas «no pueda disputarle la secretaría a Méndez en próximos congresos», aventuran desde la Ejecutiva.

Por su parte, Ignacio Fernández Toxo confirmó que se presentaría a la reelección el pasado 14 de enero —el 10º Congreso de CCOO se celebrará entre el 21 y 23 de febrero—. El veterano sindicalista aspira a revalidar el cargo en una organización que limita a tres los mandatos. «El fenómeno de Cándido sería imposible aquí por los estatutos», afirman.

Tras vencer en 2009 a José María Fidalgo, la estrategia del ferrolano para asegurarse una legislatura sin sobresaltos fue plantear una Comisión Ejecutiva de 44 miembros, que integrase a todas las sensibilidades. De salir ahora reelegido, su intención es adelgazar notablemente la estructura, para dejarla en 11 personas.